

SIN CAMBIOS, LA ESTRATEGIA GUBERNAMENTAL

**GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 15 DE AGOSTO DE 1998**

Llevamos un mes de que el EZLN rompiera el silencio. Entre el 16 y 21 de julio, lanzaron 4 comunicados después de 5 meses de silencio que al gobierno le pareció eterno. Sin embargo, tampoco fue del agrado gubernamental la voz zapatista y decidieron hacer caso omiso de la propuesta central del grupo insurgente: que el pueblo de México decidiera, en Consulta Nacional, sobre la propuesta de Ley que la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), compuesta por los partidos políticos representantes en la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, hizo sobre los Acuerdos de la Mesa 1, "Derechos y Cultura Indígena", firmada por el Gobierno Federal y el EZLN en febrero de 1996. A los dos días del último comunicado zapatista, el Secretario de Gobernación, Francisco Labastida, afirmó que Sebastián Guillén (Marcos) es "un señor que está mandando comunicados", que "ni Marcos ni nadie" van a permitir que el gobierno federal continúe "con su política de resolver los problemas de fondo de Chiapas" y que "nosotros queremos basarnos en hechos, no sólo en palabras para llevar a buen término lo que se ha planteado: una solución política al conflicto".

Analicemos los acontecimientos en Chiapas durante el último mes:

En relación a los presos, la liberación de los presuntos zapatistas ha sido una de las condiciones del EZLN para volver a la mesa del Diálogo. Sin embargo, el gobierno de Roberto Albores liberó a unos cuantos y encarceló a otros muchos. Además, liberó a 10 Chinchulines (grupo paramilitar) que ahora amenazan nuevamente a la población de los municipios de Yajalón y Chilón. En el municipio de Frontera Comalapa fueron detenidos y encarcelados dos jóvenes bases de apoyo del EZLN acusados de distintos delitos. Pese a la huelga de hambre que llevaron a cabo los presos del penal de Cerro Hueco en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, el gobierno se niega a aceptar las recomendaciones de la CNDH ya que las detenciones durante el operativo policiaco militar para dismantelar el municipio autónomo "Flores Magón" no sólo carecen de fundamento sino que el procedimiento fue irregular, por lo que las confrontaciones entre el gobierno de Albores y la CNDH se agudizaron. Por otro lado, mujeres indígenas concluyeron la "Huelga de los Machetes" frente al palacio de gobierno exigiendo la liberación de los presos de la organización "La Voz de Cerro Hueco".

Los muertos se siguen sumando a la lista. En los últimos 30 días se registraron al menos el asesinato de un dirigente del PRD y miembro de la CIOAC en el municipio de Soyaló; de un empresario y un capacitador de cine en Tuxtla Gutiérrez; de un trabajador del municipio de Tumbalá a manos de un policía; de un ganadero en el municipio de Pijijiapan. Además, de diciembre pasado a julio de este año, 56 indígenas prozapatistas han sido ejecutados, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que responsabiliza a los grupos paramilitares, ejército mexicano y cuerpos policiacos y cuyas muertes se dieron en las zonas Altos, Norte y Selva en los municipios de Chenalhó, El Bosque, Ocosingo, Tila y Palenque; de los cuales 21 son mujeres, 17 hombres, 14 niñas y 5 niños.

Sobre el asunto de la Remunicipalización, el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, anunció su "propuesta" (ver Boletín No. 113) sujeta a consulta y cuyo proceso comenzaría a definirse después de las elecciones del 4 de octubre. Sin embargo, días después y por decreto, creó las comisiones que deberían impulsar la remunicipalización; posteriormente lanzó a sus comisiones a realizar las "consultas" y publicitar su propuesta. Esto generó una cadena de descontentos por parte de algunos municipios y por otro lado la adhesión de grupos priístas apoyándola, creando más encono y división entre los indígenas. Además, la reacción de otras comunidades, incluso fuera de la zona de conflicto, fue la de solicitar igualmente la creación de nuevos municipios. El gobierno del estado informó que además de los 12 ayuntamientos que atiende la Comisión de Remunicipalización, otros 9 municipios que no están en la propuesta original se han acercado demandando la creación de más ayuntamientos.

El gobernador continúa prometiendo y garantizando elecciones limpias que se llevarán a cabo el 4 de octubre para elegir a los 111 presidentes municipales y a los diputados del Congreso Local, al tiempo en que un comando armado allana las oficinas del representante del PRD ante el Consejo Estatal Electoral y se encarcela al presidente municipal perredista de Jitotol y a un regidor del municipio de Ixtapangajoya. También continúan muchas protestas de militantes priístas que reclaman los vicios y fraudes que se llevaron a cabo en las elecciones internas del partido oficial hace algunas semanas. Como producto de esta descomposición interna, militantes del PRI han anunciado su pase a las filas de la oposición: más de mil priístas confirmaron su adhesión al PRD para las próximas elecciones en el municipio de Bochil; 500 pescadores del municipio de Tonalá se suman también al PRD. Además, priístas del municipio de Salto de Agua anuncian que no permitirán la instalación de casillas para las elecciones ante su inconformidad con el partido oficial, por lo que se cambian los papeles y el gobierno no los sataniza de anticonstitucionales, provocadores o grupos desestabilizadores; para ellos, toda la tolerancia y la entrega -días después- de 50 toneladas de maíz a las comunidades inconformes-, como la tolerancia a los priístas que expulsan de un ejido en Frontera Comalapa a una familia, y que no fue ocasión de "establecer" el estado de derecho que hiciera el gobernador cuando en el municipio de Nicolás Ruiz hiciera lo mismo a militantes del partido oficial y que le valió la intervención de un operativo policiaco-militar impresionante.

Los conflictos internos en el partido oficial se agudizan en la medida en que las elecciones se acercan: el candidato del PRI por el 14 Distrito Electoral fue destituido por su mismo partido por tener supuestos antecedentes penales, que más muestran una descomposición y un conflicto por las cuotas del poder. Del mismo modo, otros candidatos del partido oficial han sido acusados de tener antecedentes penales. Por otro lado, el PAN metió una demanda contra el gobernador Roberto Albores y su partido por apoyar las campañas priístas fuera de tiempo y con recursos gubernamentales; este problema se da en el contexto nacional de las acusaciones al PRI de haberse supuestamente financiado con fondos públicos campañas electorales pasadas incluso para las elecciones presidenciales del 1994 donde fue electo Ernesto Zedillo. No es una propuesta política y económica de los perredistas -que no la tienen- lo que provoca aumentar sus simpatizantes, sino el cansancio a las pocas respuestas del partido oficial.

Ante estas situaciones, el gobierno estatal y su partido continúan arremetiendo contra los partidos de oposición o buscando venganza política, principalmente contra el PAN y el PRD. La campaña de hostigamiento a las presidencias municipales de la oposición

siguen siendo de tres formas: 1) amenazas administrativas por supuestos malos manejos de fondos públicos, mientras los ayuntamientos priístas siguen intocables; 2) amenazas penales tanto a sus presidentes municipales o miembros del ayuntamiento; 3) reabriendo expedientes penales contra candidatos de la oposición. Así, en la contienda electoral votarán un millón 969 mil ciudadanos chiapanecos para el 4 de octubre donde podemos encontrar sorpresas.

En cuanto a la militarización, fuertes movilizaciones de tropas se han registrado en la zona de conflicto, aunque las fuerzas castrenses argumentan la necesidad de "reacomodar afectivos". Por su lado, la Secretaría de la Defensa confirmó que no saldrá de Chiapas y que "nosotros no tenemos vocación de violadores de derechos humanos, más bien tenemos el afán de servidores del pueblo, como está perfectamente acreditado en la historia de México y en los hechos recientes". Sobre las declaraciones del Secretario de la ONU en el sentido de que la vía del diálogo es la solución al conflicto, la institución castrense manifestó: "No podríamos estar lejos de estas posturas tan sensatas, tan humanísticas, tan reales, tan benéficas para México, y para cualquier país que confronte un problema". Sin embargo, en días pasados, campesinos del municipio de Venustiano Carranza denuncian la excesiva militarización y hostigamiento de los cuerpos policiacos; en la región de Tapachula se descubrió la quema de harina en vez de cocaína incautada.

El gobierno del estado continúa con su campaña de apagar la moral zapatista informando que más de mil 200 jefes de familia han desertado del EZLN tan sólo en los últimos meses. De ser esto cierto, significaría alrededor de 8 mil personas bases de apoyo que han desertado, por lo que menos se justifica tanta presencia militar para un puñado de campesinos que se dice forma el EZLN. Sin embargo, la campaña trasciende las fronteras, ya que autoridades de Guatemala y El Salvador anunciaron que apoyarán en la investigación de presuntos corredores de tráfico de armas presumiblemente destinados al EZLN. Por si fuera poco, el ejército mexicano no sólo entrena a sus elementos en la Escuela de las Américas, sino en otra escuela de asesinos, la Escuela Kaibil, en Poptún, Petén, Guatemala. Así, el diario Prensa Libre del vecino país informó ya desde el 16 de junio de 1997, que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Sergio Arnoldo Camargo Muralles, jefes de los distintos comandos de la república y agregados militares acreditados en el país, concurrieron a la clausura del XLVIII curso internacional Kaibil, del cual egresaron 17 oficiales, entre ellos tres mexicanos. Uno de ellos, el teniente Jesús Villar Peguero, logró el mayor puntaje de esos adiestramiento para tropas de elite.

Hasta el momento no se han detenido a los grupos paramilitares pese a que los reclamos continúan para desmantelar a dichos grupos. El Frente Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (FAO-LN) que aglutina a varias organizaciones en la Zona Costa y Soconusco, denunciaron la presencia de más de 10 grupos paramilitares en la región. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoce la existencia de grupos civiles armados como Paz y Justicia, MIRA, Chinchulines, etc., pero se niega a reconocerlos técnicamente como "paramilitares". Por su lado, miembros del PRI demandaron al Ombudsman presente pruebas sobre la existencia de paramilitares.

En el municipio de Tila, campesinos denunciaron el hostigamiento del grupo paramilitar Paz y Justicia quienes han realizado balaceras y una estrategia de tortura psicológica

entre la población; desplazados de Busiljá, municipio de Ocosingo, denunciaron que presuntos paramilitares priístas continúan asediándolos en su lugar de refugio; organizaciones campesinas denuncian hostigamientos del presunto grupo paramilitar "Los Chentes" en el municipio de Berriozábal, colindante con Tuxtla Gutiérrez; zapatistas de Taniperla, Ocosingo, denuncian que paramilitares del MIRA se pasean armados e incluso uniformados de policías asediando a la población; indígenas de diversas organizaciones sociales y miembros del PRD denuncian hostigamientos de policías y grupos de choque en el municipio de Oxchuc, donde presuntamente opera el grupo paramilitar MIRA. Mientras tanto, en el municipio de Sabanilla, pobladores priístas niegan la entrada a la ayuda de la Cruz Roja Internacional quien asegura que en Chiapas no hay guerra, sino sólo "tensión".

El asunto de la masacre de Acteal se ha complicado. Según la prensa, el gobierno de Roberto Albores destina y paga a 6 abogados para defender y buscar la excarcelación de los más de 87 presos culpables de la masacre de Acteal, aunque desmiente tal información. Según el abogado de oficio, al menos 70 podrían quedar libres próximamente comprobada ya su inocencia. Mientras tanto, los familiares de los supuestos paramilitares esperan que muy pronto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) gire recomendaciones al gobierno de Albores para liberarlos. Por su lado, 120 campesinos familiares de dichos presos emprenden su viaje a la ciudad de México para pedir la liberación de los paramilitares. Ahora resulta que ninguno de los inculcados participó en la masacre ya que -argumentan- se encontraban trabajando en el campo y en sus telares al momento de la masacre. Esta argumentación parece más que absurda después de las pruebas. Sin embargo, de ser cierto, resulta entonces más preocupantes que 100 paramilitares que pudieron participar en la masacre en distintas formas andarían todavía sueltos, lo que pondría más en tela de juicio la impartición de justicia. Por otro lado, fuentes gubernamentales confirmaron que los 14 ex funcionarios gubernamentales en función con el ex gobernador Julio Cesar Ruiz Ferro ya se han presentado a declarar sobre la masacre de Acteal, pero a ninguno se le ha deslindado todavía responsabilidad alguna. También se anunció la liberación de 6 órdenes de aprehensión contra presuntos implicados. Pero hasta la fecha, los miles de policías y militares en Chenalhó no dan con los culpables. Hasta el momento se han encarcelado a 123 personas, de los cuales 28 son policías estatales, 94 indígenas y el expresidente municipal de Chenalhó.

Sobre la masacre de El Bosque, el gobierno siguió insistiendo de que los presuntos zapatistas no fueron ejecutados pese a las pruebas presentadas, y que el estado en que fueron entregados se debió a "causas naturales de putrefacción de los cuerpos". Esta postura le ha costado al gobierno de Albores una confrontación más con la CNDH -dependencia gubernamental- que pretende deslindarse y desmentir los informes del gobernador. Días después, campesinos de la comunidad priísta de "Los Plátanos", municipio de El Bosque, donde se denunció la existencia del presunto grupo paramilitar "Los Plátanos", detuvieron al agregado militar adjunto de la Embajada de los EE.UU. Thomas A. Guillén, en compañía de Elizabeth Krug, de la misma dependencia, durante 8 horas, sin que el gobierno supiera de su presencia. Este hecho provocó fuertes reacciones sobre la supuesta labor de espionaje e intromisión militar estadounidense en Chiapas.

La sexta, séptima y octava visita presidencial se da en este mes a Chiapas. Visita el municipio de Ocosingo y promete nuevamente fondos de inversión para el desarrollo y

acclaró que "Han sido otros los que, a partir de su propia decisión, se han excluido del diálogo. Pero nadie puede decir que el Gobierno ha pretendido excluir a persona u organización alguna del proceso del diálogo". La séptima visita la realiza de manera discreta con el Secretario de la Defensa Nacional. La octava con su familia recorriendo lugares turísticos de Ocosingo. Con estas visitas, al menos unos 20 municipios han sido recorridos por el presidente de la República.

Para la COCOPA la situación no ha sido nada fácil. El presidente Zedillo sigue cobrando la factura a los legisladores por no aprobar su propuesta unilateral sobre Derechos y Cultura Indígena y se deslinda de la tardanza para hacer real los derechos de los indígenas en el país. Por su lado, la misma COCOPA continúa insistiendo en una reunión directa con el EZLN.

Para la Diócesis de San Cristóbal de las Casas no hay tregua. El párroco del municipio de Yajalón presentó una denuncia penal contra agentes policiacos por hostigamiento, por lo que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomiende medidas cautelares. Por su lado, la Comisión Episcopal visita Chiapas para entrevistarse con distintos actores. Esta comisión está integrada por 10 obispos, entre ellos Morales Reyes, Arizmendi Esquivel (Tapachula), Samuel Ruiz (San Cristóbal), Raúl Vera O.P. (San Cristóbal), Felipe Aguirre Franco (Tuxtla), Carlos Talavera (Coatzacoalcos), Héctor González Martínez (Oaxaca). En el caso de la Iglesias Evangélicas, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (COFRATERNICE) continúa repitiendo el discurso oficial: acusa al EZLN de ser un grupo ilegal y paramilitar, critica los "usos y costumbres" de las comunidades indígenas, rechazan la autonomía indígena, critica constantemente al obispo Don Samuel Ruiz y al papel que realizó la ex CONAI, acusa a presuntos catequistas católicos de destrucción de templos evangélicos y solicita se ejecuten 21 órdenes de aprehensión.

Las organizaciones sociales y grupos organizados continúan manifestado inconformidades por medio de plantones, marchas, tomas de edificios públicos, lo que refleja nuevamente que el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Albores donde supuestamente "el 90% de la población chiapaneca" que lo firmó, se comprometía a no realizar dichos actos. Extrabajadores de presas hidroeléctricas marcharon por tercera vez demandando derechos laborales; 200 ejidatarios del municipio de Villaflores protestaron frente al palacio del gobierno de Albores por el cumplimiento de proyectos productivos por parte de las autoridades agrarias; educadores comunitarios de ocho regiones de la Zona Norte realizaron lo mismo demandando derechos en el sector educativo; estudiantes rechazaron el cierre de espacios educativos; mujeres indígenas realizaron actos exigiendo la liberación de presos. Al mismo tiempo, arribaron a Chiapas 100 jóvenes del PRD de la Ciudad de México para conformar "Campamentos Civiles de Paz" durante un mes.

Tanto las organizaciones campesinas de la CIOAC como de la AEDPCh, continúan denunciando acoso, hostigamiento y amenazas contra sus dirigentes y bases, al tiempo en que demandan el esclarecimiento del asesinato de Ruiz Gamboa, perpetrado a inicios del año. Por su lado, diversas organizaciones sociales y políticas presentan al Secretario de la ONU, Kofi Annan, sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas. Al parecer, a raíz de este hecho, miembros del PRI demandan que se investigue a las ONGs ya que se sospecha financian al EZLN, que tergiversan y lucran

con el conflicto chiapaneco. Sin embargo, pocos días después, Emma Cosío Villegas, anunció que destinará las regalías de las obras de su padre al EZLN.

Respecto al proceso de diálogo y negociación, después de los comunicados del EZLN, el gobierno volvió a combatir con sus discursos, el doble lenguaje y a contrarrestar el efecto de los comunicados. El Secretario de Gobernación afirmó que el Subcomandante Marcos podría quedarse hasta 5 años si quiere en la Selva Lacandona y que es mejor escritor que político; al tiempo que hacen caso omiso de la Consulta Nacional y, junto con sus voceros, descalificando y hasta negando la existencia de la propuesta de Ley de la COCOPA. Además, en los mismos días en que se dan los comunicados, un diario local, presuntamente cercano al gobierno del estado, emitió la información de que el EZLN haría una acción militar, pretexto para reforzar retenes, patrullajes y sobrevuelos durante los días sucesivos. Por si fuera poco, el "Coordinador para el Diálogo" afirmó que las apreciaciones del EZLN están "alejadas por completo de lo que acontece en Chiapas". Así, el gobierno negó las acusaciones sobre estar llevando una "guerra de exterminio" al tiempo que ofreció nuevamente un "diálogo directo" con el EZLN y negarse a retirar la propuesta unilateral de ley sobre Derechos y Cultura Indígena que hiciera el presidente Zedillo en marzo de este año.

Entre los actores que piden una mediación internacional está el Congreso Nacional Indígena que llevará a cabo su Segundo Congreso Nacional el próximo 16 de octubre. Para el CNI, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y el retiro del Ejército Mexicano de las comunidades indígenas serán las condiciones necesarias para la reanudación del diálogo.

El extranjero Peter Brown es expulsado del país por apoyar a la educación de los indígenas por medio de la construcción de una escuela en el Aguascalientes de Oventic, municipio de San Andrés Larráinzar. Así, todos los cercos se pretende cerrar para los indígenas: el militar, de salud, de producción, de comercialización y ahora hasta la educación le es negada. También, el Ejército Mexicano impidió la entrada a 12 extranjeros de España, Italia y EE.UU. a la comunidad de Roberto Barrios, en el municipio de Palenque.

Política del gasto social: tanto el gobierno Federal como Estatal siguen anunciando recursos y convenios para "reactivar la economía y la producción en Chiapas" con fondos, como ya hemos dicho, ridículos (ver Boletín No. 122). De igual modo, el discurso continúa siendo en futuro, como hace años: "se esperan inversiones", "garantizará", "se anunciará", etc. En el mes de agosto, el gobernador Roberto Albores informó ahora que el gasto federal para Chiapas es de 7 mil 57 millones de pesos para 1998 (poco más de 5 pesos diarios por chiapaneco) de los cuales se han invertido ya el 40% para los sectores agropecuario, Cultural, Recreación y Deporte; Ecología, Recursos Naturales y Pesca; Zonas Indígenas, Salud y Asistencia Social; Educación; Convenio de Desarrollo Social; Agrario; Industria y Comercio; Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Comunicaciones y Transporte. Lo anterior nos haría suponer un avance visiblemente mejor en el panorama chiapaneco.

En cuanto a los Cuerpos Policiacos, el Secretario de Gobernación, en su primera y única visita hasta el momento a Chiapas, firmó un Convenio de Seguridad Pública con un presupuesto de 127.5 millones de pesos para la compra de armamento, equipo, contratación de 267 policías judiciales, 40 peritos y 50 agentes de ministerio público.

Del mismo modo anunció un incremento salarial para los ministerios públicos quienes pasarán de 3 mil pesos a 10 o 15 mil pesos mensuales (de mil cien a mil seiscientos dólares). Estos se suman a los 5 mil policías que ya contrató el gobernador Albores a principios del año.

En el contexto nacional tenemos otros problemas. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) ha sido en las últimas semanas el eje de discusión más fuerte entre los Poderes de la Unión. El PRD ha puesto el dedo en la llaga porque afecta a todos los sectores importantes del país: banqueros, de funcionarios, exfuncionarios priístas y grandes empresarios, entre ellos militantes incluso del PAN. Son 552 mil 300 millones de pesos (más de 61 mil millones de dólares) que el gobierno pretende pasar a deuda pública, por lo que el PRD demanda una consulta pública que los sectores afectados han rechazado. Al igual que la consulta del EZLN, hay un temor al pueblo y a la democracia.

La situación económica del país se pone más crítica. La caída de los precios del petróleo; la caída de la producción agropecuaria; la caída de la bolsa de valores; la deuda pública que representa ya el 27 y 28% del Producto Interno Bruto (PIB); el peso que se desploma hasta 9.40 por dólar en los últimos días; el recorte del circulante y el problema del FOBAPROA, pondrán al gobierno de la República y al Poder Ejecutivo en un serio problema en el IV Informe de Gobierno del Presidente Zedillo que tendrá que realizar el 1º. De Septiembre. Del mismo modo, pone al partido oficial en un bache profundo en la recta final a las elecciones presidenciales del año 2000. Sin embargo, para el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William J. McDonough, la política económica de México es efectiva para enfrentar las adversidades financieras de nuestro país.

Al día siguiente de los comunicados del EZLN, llega el nuevo embajador de los EE.UU. Jeffrey Davidow a tomar posesión de un cargo que estuvo vacante por un año; afirmó que la relación con México es la más importante para los EE.UU. y negó tener injerencia en el conflicto de Chiapas, cuando días después, cayera en manos priístas el agregado militar estadounidense en el municipio de El Bosque. Por su cuenta, Senadores de los EE.UU. posponen para después del IV informe de gobierno del presidente Zedillo, la presentación de una resolución que en principio urgiría al gobierno de México a buscar un acuerdo de paz en Chiapas; mientras que otros organismos, como el Instituto de Principios Básicos de la Vida, con sede en Indianápolis, destinan fondos para proyectos de interés social del gobierno de Roberto Albores.

Ante estos hechos, podemos constatar que siguen los mismos discursos, las mismas actitudes y las mismas acciones gubernamentales con respecto a los distintos actores. El gobierno federal va perdiendo aceleradamente la credibilidad y la capacidad de generar iniciativas y escenarios políticos. Esto es sumamente preocupante porque, de no aceptar un proceso de transición, la imposición se hace por la fuerza. Del mismo modo, el gobernador del estado tiene el peligro de quedarse solo, ya que se ha confrontado fuertemente con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, con el obispo Samuel Ruiz y la desaparecida CONAI, con la COCOPA, con organizaciones campesinas, con ONGs, con la CNDH y con los partidos de oposición.